

Balance de conflictividad socioambiental

Yanet Cueva Sánchez

Economista y analista de datos



Fuente: Fuente: RPP Noticias.

Apuntes a Lápiz, inicia este nuevo año abordando un balance de la conflictividad social en el año 2021, un tema fundamental para la gobernabilidad y la estabilidad social. Con ese fin ha convocado a cinco especialistas del ámbito académico, empresarial y gubernamental para conocer su visión sobre la gestión del gobierno de Castillo en este campo. Así tenemos la participación de Jorge Romero Ríos, ex jefe de la Oficina de Gestión Social del MINEM; Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM; Luis Miguel Incháustegui, ex ministro de energía y minas; Marina Irigoyen, coordinadora del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible; y Jorge Manco Zaconetti, economista investigador de la UNMSM

Para tal efecto ha formulado cuatro preguntas motivadoras para conocer sus opiniones de nuestros invitados, estas son 1) ¿Cuál es el balance de la conflictividad socioambiental del año bicentenario?; 2) ¿Cree usted que la conflictividad aumentó por las expectativas que generó el gobierno de Pedro Castillo? ¿Considera usted que el gobierno con el respaldo popular que tenía en el Sur pudo hacer algo más para que los conflictos no escalaran?; 3) ¿Qué opina de la suspensión de las operaciones de MMG las Bambas? ¿Qué efectos tendrá su retiro para el sector minero?; 4) ¿Cuáles son las perspectivas del sector minero en este gobierno?

Podemos compartir las ideas presentadas o discrepar de ellas, lo importante para nuestra edición es abordar el tema desde varios ángulos, sobre la base de experiencia y evidencia para contribuir a abordar un tema central para la gobernabilidad.

“la situación de paralización no es por una movilización de fuerzas antimineras, sino por una población que busca insertarse en la cadena de valor de la empresa...”



Jorge Romero Ríos

Economista con más de 20 años de experiencia, especialista en responsabilidad social, gestión pública, proyectos de inversión, gestión social y diálogo. Ha sido director de diálogo del MINEM Y MCVS; asesor de alta dirección del Viceministerio de Gobernanza Territorial-PCM, MTC, MINCUL y Autoridad de Reconstrucción con Cambios.

AaL: ¿Cuál es el balance de la conflictividad socioambiental del año bicentenario?

Podemos dividir el año del bicentenario en dos periodos, uno que va de enero a julio que corresponde al gobierno de transición de Sagasti. Y un segundo momento que va desde agosto a diciembre correspondiente al gobierno de Pedro Castillo.

En el primer caso, el gobierno, iniciaba el año con la amenaza de la segunda ola por la pandemia del COVID-19 y la presión por llegar a acuerdos comerciales para obtener la vacuna. En ese marco llegaba a terminarse el paro agrario contra las agroexportadoras al derogarse la ley de promoción agraria. El Reporte Willaqniki de PCM, de junio 2021, reporta en el período enero-junio 2021, un total de 196 conflictos sociales activos a nivel nacional, de los cuales el 64% de los conflictos sociales registrados corresponden a problemáticas socioambientales.

En este periodo estuvieron presentes las controversias en Las Bambas. Así autoridades y comuneros de Challhuahuacho, por un lado, y de la provincia de Cotabambas exigían al gobierno que obligue a MMG Las Bambas pagar el canon minero a partir del 2021. Mientras que en el ámbito de influencia continuaba fricciones y reuniones de diálogo de forma bilateral con varias comunidades entre ellas con la comunidad Huancuire donde se ubica el futuro tajo Challcobamba. Por otro lado, en la vía del Corredor Minero las negociaciones y amenazas de bloqueos se daban por comunidades de Ccapacmarca y barrios de Velille.

En distritos de las provincias de Paúcar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas de Ayacucho Sur, luego del paro de 72 horas en diciembre de 2020 contra de las empresas mineras que trabajan en la zona, se mantuvo un clima de diálogo para atender las demandas de preservación de las cabecezas de cuenca supuestamente amenazadas por las actividades mineras.

En Puno, los puntos de conflictividad originadas por la contaminación de las cuencas del Ramis, Llallimayo y Coata, mantuvieron un nivel de atención y diálogo en base a hitos de trabajo, que quedaron pendientes al arribo del nuevo gobierno. Y en la zona del circuito petrolero, luego de la entrega de

la Estación 5 en vísperas de navidad de 2020, el conflicto que se mantuvo fue en entre tres comunidades que cercaron el campamento en cierre de Pluspetrol. En general la zona se mantuvo en un clima pacífico entre los meses de enero a julio 2021.

Los conflictos socioambientales no desaparecen en este periodo, por el contrario siguieron vigentes, pero observamos que se logra mantener un clima de dialogo y desescalamiento por tres factores, primero hay un trabajo de mucho diálogo interno y articulado entre PCM y MINEM con el soporte de Cultura y MINAM; en segundo lugar, hay una presencia territorial de los sectores en las zonas de conflicto; y tercero, hay una mayor proactividad en la participación de los gobiernos regionales y locales en los conflictos.

Con la asunción del nuevo gobierno de Pedro Castillo, la agudización de la conflictividad social desde julio ha provocado que siete minas hayan suspendido sus operaciones de manera total o parcialmente: Uchucchacua, Antamina, Breapampa, Cerro Lindo, Apumayo, Anabi y Las Bambas. En tres de ellas con hechos violentos como la provocación de incendios de los campamentos.

Mientras que, en el circuito petrolero, el 4 de octubre se inició un paro amazónico, nuevamente con la toma de la Estación 5 de Petroperú, esta vez por las bases de la Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera. La medida de fuerza involucró presiones sobre el Lote 8, Lote 192 y el Lote 95 de Petrotal, única zona en producción. Finalmente, el 15 de diciembre liberan la Estación



Fuente: Ojo Público.

5 sin llegar a ningún acuerdo con el gobierno.

Como se ve, este segundo tiempo del año, con el nuevo gobierno, el saldo es negativo.

AaL: ¿Cree usted que la conflictividad aumentó por las expectativas que generó el gobierno de Pedro Castillo? ¿Considera usted que el gobierno con el respaldo popular que tenía en el Sur pudo hacer algo más para que los conflictos no escalaran?

Primero hay que decir que los conflictos socio ambientales tienen causas estructurales como la pobreza, brechas sociales, aislamiento territorial, desempleo, desnutrición, escasa presencia del Estado, discriminación cultural; aspectos presentes en las zonas donde se desarrollan inversiones extractivas. Pero también hay causas generadas en el transcurso de las mismas actividades mineras y petroleras, como los impactos ambientales, las expectativas de apoyo social y empleo, los compromisos incumplidos, el relacionamiento social negativo, percepciones sociales, politización temática y muchas otras más. Cada gobierno debe saber qué enfrentará este cuadro de múltiples factores y debe estar preparado.

El triunfo de Pedro Castillo se debe en parte a las altas votaciones obtenidas en los distritos “mineros”, que van por encima del 70%. Este dato nos da una explicación del origen de las altas expectativas de la población de los entornos mineros. Y esto se incrementó en los primeros meses del premierato de Guido Bellido y de alguna forma se extendió con Mirtha Vásquez por su intervención en Ayacucho. El problema para el gobierno es que a la par de alentar el crecimiento de las expec-

tativas —fuera de las frases preparadas para los medios de comunicación— no tiene una estrategia de intervención para los conflictos sociales. Por otra parte, en los tres primeros meses de gobierno se abandonó la gestión territorial de los casos, desmovilizando, despidiendo y congelando a los equipos de campo de PCM y MINEM, mientras que estas dos instituciones han caminado por su lado, en una sorda disputa política y sectorial. En resumen, la gestión social del gobierno es atravesada por su poca preparación técnica, desarticulación interna y falta de liderazgo.

AaL: ¿Qué opina de la suspensión de las operaciones de MMG las Bambas? ¿Qué efectos tendrá su retiro para el sector minero?

Si algo demuestra que un proyecto de la magnitud de Las Bambas suspenda sus operaciones es que no solo pierde la mina, pierden los trabajadores, pierden las comunidades, pierde el país. Es negativo para la economía, el desarrollo y la gobernabilidad, ni hablar de las señales perjudiciales para las inversiones.

Las Bambas significa el 1% del PBI nacional y es el 2% de la producción mundial de cobre, su paralización significa que como país dejamos de recibir más de S/ 5 millones diarios. Pero no se trata solo de este proyecto, según estimaciones de la SNMPE, la minería ha dejado de producir 150 mil toneladas de cobre este año, siendo lo más grave, que cerca de 100 mil corresponden a Las Bambas. En un escenario internacional de buenos precios, el impacto fiscal ascendería a S/1.450 millones que se dejaría de percibir, monto mayor a los cálculos proyectados de ingresos que el Gobierno buscaba con la propuesta de reforma tributaria del sector minero. Por otra parte, también hay un efecto en

la demanda de electricidad, que está cayendo y que más adelante veremos sus consecuencias.

Este conflicto no deja de ser paradójico, la situación de paralización no es por una movilización de fuerzas antimineras, sino por una población que busca insertarse en la cadena de valor de la empresa, donde el Estado es parte, no solo facilitador o mediador, aquí los enfoques de diálogo y gestión de conflictos no están claros para el gobierno.

Y tampoco el manejo de los tiempos, en realidad siempre se ha tenido un enfoque lineal de los conflictos: prevención – gestión – seguimiento, la recurrencia de los casos con Las Bambas y otros proyectos sean mineros o de hidrocarburos, es que la intervención temporal es circular, lo que consideramos cerrado por cumplimiento de compromisos, mañana se abrirá nuevamente, porque debemos tomar en cuenta que las soluciones de coyuntura no resuelven los temas estructurales. Lo importante de un enfoque circular es que la prevención transversaliza todas las etapas del conflicto, y permite un manejo para generar condiciones de diálogo.

Con el reciente diálogo en Huiniquiri realizado y promovido por la PCM este 30 de diciembre, se abre una oportunidad para encauzar alternativas de solución al conflicto del Corredor Minero; sin embargo, la posición en contra de los acuerdos por parte de las comunidades de Ccapacmarca y del distrito de Challhuahuacho, evidencian que el camino es largo, y tiene que ver con la necesidad de afirmar un enfoque territorial, rompiendo con la visión fragmentaria del territorio para abordar los conflictos.

AaL: ¿Cuáles son las perspectivas del sector minero en este gobierno?

MINEM tiene una cartera de 43 proyectos de construcción de minas, por una inversión total de US\$ 53,168 millones; y solo Quellaveco de Anglo American concluirá las facilidades e iniciará su puesta en operación el próximo año, con una inversión de US\$ 5,300 millones, y una proyección anual de 300,000 toneladas de cobre fino.

En estos momentos parece no haber otro proyecto nuevo listo, aunque en teoría se tiene vigente para el 2022 el inicio de la construcción de otros seis proyectos por una inversión que asciende a US\$ 4,417 millones, entre los que se encuentra Chalcobamba Fase I, Corani, Optimización Inmaculada, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros. Cada proyecto con diversa intensidad de conflictividad social, que el Estado debe prever.

Se necesita para los intereses del país, un nuevo pacto social para desarrollar la minería, por eso es importante poner en valor los resultados y recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de febrero 2020. La comisión plantea una política pública que construya un "Estado capaz de asegurar el desarrollo de la actividad minera, de acuerdo a ley, la iniciativa privada y en armonía con los derechos fundamentales de los ciudadanos", destacando un enfoque territorial para compatibilizar las actividades mineras con el desarrollo regional y local, así como un nuevo modelo de evaluación ambiental temprana. El gobierno de Pedro Castillo tiene un instrumento muy valioso para realizar el giro de la acción gubernamental en la gestión de los conflictos socio ambientales.



Fuente: RPP Noticias.

“No solo van a perder las empresas, sino también las comunidades y, además, perderá el país...”



AaL: ¿La conflictividad social ha aumentado en el período del presidente Castillo?

Sin ninguna duda. Ha habido un aumento evidente del número de conflictos que se activan o se mantienen en situación de crisis. Eso tiene que ver con varios factores: primero, las expectativas que se han construido en la población, principalmente en muchas zonas rurales, por los ofrecimientos de campaña del presidente Castillo, con respecto a “gobernar para el pueblo”, incluyendo a sectores de la población largamente excluidos que ahora están esperando que esas promesas se concreten. Segundo, la falta de acciones efectivas durante el período del Premier Bellido; recordemos su cabalgata en la provincia de Chumbivilcas y los ofrecimientos de solución que durante su periodo no llegaron, pero que ahora la población Chumbivilcas los exige al actual gabinete.

En el caso de la Premier Vázquez, es evidente que hay un cambio en la manera de abordar los problemas con respecto a Bellido. Inicialmente se notó cierta ambigüedad en los mensajes; recordemos el caso del sur de Ayacucho, en Coracora ella dijo que se iban a cerrar las minas y luego tuvo que matizar sus declaraciones porque no se ajustaban al marco normativo vigente; o en el caso de Las Bambas, ahora en primer plano, en el que la PCM demoró algo en reaccionar. En este punto hay que decir que el Ministerio de Energía y Minas no jugó un papel favorable para ayudar al Poder Ejecutivo a gestionar los conflictos en el sector; baste recordar aquella acta firmada el 7 de diciembre en Chumbivilcas por el jefe de su oficina de gestión social, en la cual simplemente apoya la posición de las comunidades sin buscar una solución de conjunto al problema existente.

Felizmente, hace poco la PCM ha decidido retomar el liderazgo en el tema. Primero, hace unas semanas, consiguieron liberar la Estación 5 de Petroperú en Loreto, que tenía varios meses ocupada por comunidades indígenas. Y este 30 de diciembre, justo antes de terminar el año, la Premier Vázquez ha conseguido un importante avance con el acta suscrita en Chumbivil-

Raúl Molina Martínez

Ex viceministro de Gobernanza y Ordenamiento Territorial. Máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializaciones en diseño de políticas regionales por el ILPES (CEPAL) en Chile, promoción del desarrollo económico local en Ecuador y evaluación de proyectos de desarrollo en Colombia

cas, que asienta el proceso de diálogo reabierto la semana anterior, logra el desbloqueo de la carretera y retoma la agenda mayor del Corredor Minero Sur, enfocándose en la consolidación de la carretera, reducción de la contaminación en tanto se pavimenta y mejora la calidad de vida de las comunidades. Se abren con ello notables desafíos que esperemos, se conviertan en resultados concretos para la población.

AaL: ¿Cuál es su balance de la conflictividad socioambiental en el año bicentenario?

Lo primero que hay que distinguir en la conflictividad social es que en el año 2021 hubo dos periodos, dos gobiernos distintos. El Gobierno de Francisco Sagasti que culminó en julio y el Gobierno de Pedro Castillo que inició en fiestas patrias.

En el caso de Sagasti, fue un gobierno corto y por lo tanto podía usar una estrategia de manejo de los conflictos de perspectiva corta, es decir, “ganar tiempo y tratar de evitar crisis mayores”. Sin embargo, hacia finales del 2020 tuvo que enfrentar la fuerte crisis de los jornaleros de empresas agro-exportadoras de la costa, inclusive con pérdidas de vidas. Luego, a partir de enero, el interés público, de los medios de comunicación y de la opinión pública se fue enfocando en la campaña electoral nacional y en el cambio de gobierno, y eso le permitió al gobierno de Sagasti disfrutar de una cierta calma temporal respecto a los conflictos sociales.

En el caso de Castillo, cuando él asume, ha sido evidente una exacerbación de los conflictos. En ello hay que distinguir dos planos: uno, el del número de conflictos que entran en crisis; el otro, el de la intensidad de las acciones que toman los actores en conflicto. En este sentido, por un lado, se han dado casos de violencia exacerbada como el incendio de un campamento minero en el sur de Ayacucho, las acciones exigentes de toma de carretera por la Comunidad de Aquia frente a la empresa Antamina, y más recientemente, las comunidades de Chumbivilcas respecto a MMG Las Bambas.

Por otro lado, un nuevo factor ha entrado en juego, un cambio en la respuesta de las empresas mineras para presionar al Gobierno de Castillo, usando el mecanismo de la suspensión de operaciones. Antamina fue la primera que suspendió operaciones frente al conflicto con la comunidad de Aquia; luego fue Nexa en las alturas de la provincia de Chincha; ahora el caso sonado de Las Bambas, que anunció la suspensión de sus operaciones en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

Es verdad que el Gobierno de Castillo, efectivamente, no mostró celeridad, ni mucha clari-

dad en sus respuestas a los conflictos sociales con actividades extractivas. Y también es obvio que, si seguimos en esta espiral de conflictividad, todos vamos a perder. No solo van a perder las empresas, sino también las comunidades y, además, perderá el país, por el aporte que hace la minería al PBI y los impuestos asociados a ella. Hemos estado yendo a una situación de impasse, frente a la cual necesitamos seria y urgentemente, encontrar una manera en la que minería y comunidades puedan convivir, en tanto necesitamos de la minería como uno de los principales aportantes al tesoro público. Ahora bien, lo dicho anteriormente, implica algunas condiciones.

Las comunidades tienen que encontrar respuestas efectivas a sus aspiraciones de una vida mejor. Se tiene deudas de largo aliento, por no decir de toda la vida republicana, con muchas zonas del país, que en muchos casos coinciden con aquellas donde se desarrolla la minería. En esas zonas, las comunidades tienen derecho a encontrar respuestas —tanto del sector privado como del público— a sus aspiraciones de poder vivir mejor; no se les puede pedir que acepten una actividad moderna, global como la minería de alto estándar sin que ellos puedan mejorar



Fuente: Actualidad ambiental.

su calidad de vida. Pero también las empresas, si queremos que reconozcan al Perú como un lugar favorable para desarrollarse, necesitan operar en un entorno positivo, de paz social y de compromiso del Estado —y de ellas mismas— con el desarrollo territorial inclusivo.

AaL: ¿Cree que el Gobierno pudo haber hecho algo más para que los conflictos no escalen, considerando el respaldo popular que el presidente Castillo consiguió en el sur del país?

Si nos referimos a lo que sugiere la pregunta, es decir si el respaldo popular pudo ser base para haber hecho más, obviamente que el gobierno pudo hacer más. Con el respaldo que el Presidente Castillo obtuvo en el sur del país, hubiera podido enfocarse en lanzar políticas inclusivas efectivas como las que propuso en campaña y tal vez los conflictos no hubieran recrudecido tanto en esa zona del país.

En contra de ello, el Poder Ejecutivo, el Congreso y el conjunto de las fuerzas políticas han estado enfrascados en un clima de confrontación política que está haciendo que infelizmente, el gobierno no se concentre en políticas públicas, sino en atender y sobrevivir a ese ruido político. Sin duda que el gobierno ha cometido errores que han contribuido a esta situación, pero es indispensable salir de ese permanente choque de poderes y lograr que este gobierno se enfoque en políticas públicas de servicio a la población. Así el gobierno podría ofrecer respuestas más claras y oportunas a los distintos conflictos sociales y a otros temas de interés nacional.

En ese marco, es totalmente atendible la posición que ha expresado la Premier Vázquez en el sentido de considerar y atender los derechos de las comunidades, pero también tenemos que aceptar que necesitamos de la inversión privada para sostener el crecimiento del PBI y poder financiar el presupuesto público. El Estado debe atender el interés general; que el Estado sirva solo a las comunidades o solo a la empresa privada es una disyuntiva falsa. En democracia, el Estado debe contribuir a encontrar salidas a los diversos intereses que conviven en la sociedad y ayudar a buscar caminos de síntesis, donde los intereses privados, los intereses comunales, los intereses del sector público puedan hallar objetivos convergentes que nos permitan avanzar como sociedad. Esto no es fácil, pero es el rol del Estado, es ineludible para él.

No se debe permitir que el sector privado no cumpla con sus responsabilidades sociales y ambientales, pero tampoco se puede permitir el uso permanente de la coerción y mucho menos de la violencia por parte de las comunidades para concretar sus expectativas. Para que las comunidades no se vean arrastradas por

intereses específicos de ciertos operadores que aprovechan y usan sus legítimas expectativas para conducirlos a la violencia, el Estado tiene que responder cumpliendo sus obligaciones de provisión de bienes y servicios públicos, y también tiene que responder asumiendo su rol de liderazgo en los procesos de diálogo y relacionamiento entre comunidades y empresas.

Ya no debemos permitir que las comunidades y las empresas negocien solas; ese fue un gran error de la política sectorial de los 90, centrándose en dar concesiones mineras y dejando a comunidades y empresas que luego resuelvan sus asuntos solas. Ahora estamos heredando los efectos negativos de ese enfoque. La discusión sobre el desarrollo territorial y la convivencia entre minería y comunidades es una discusión de a tres, donde el Estado ya no puede estar ausente.

AaL: ¿Qué opina de la suspensión de operaciones de MMG Las Bambas y qué efectos podría tener su retiro sobre el sector minero en su conjunto?

MMG Las Bambas ha seguido la ruta que abrió Antamina, anunciando la suspensión de sus operaciones frente al conflicto que tuvo con la comunidad de Aquia. Otras empresas han querido seguir ese mismo camino. Considero que el sector minero y en particular MMG Las Bambas, están queriendo poner la pelota en los pies del Poder Ejecutivo, para que asuma su papel en la solución de los conflictos. La diferencia con Antamina es que ésta hizo un anuncio nacional; en el caso de MMG Las Bambas lo hizo en la Bolsa de Hong Kong, lo que implica mayor repercusión internacional.

¿A qué responde eso? El sector minero sin duda, está preocupado por la orientación general del gobierno del presidente Castillo y por la forma cómo ha venido reaccionando a la conflictividad social. En el caso de MMG Las Bambas es una empresa que está en una situación particularmente compleja; en cinco años de operación ha enfrentado más 400 días de bloqueo y no hay que ser experto para saber que ninguna empresa puede seguir con ese nivel de incertidumbre y riesgo para sus operaciones.

AaL: ¿Otras empresas van a seguir el camino de MMG Las Bambas de “presionar” al Gobierno con anuncios de cierre o suspensión?

Creo que todo el sector minero y las comunidades de zonas mineras están observando lo que está pasando en Chumbivilcas. Las comunidades de las provincias vecinas del Corredor Minero seguramente están observando el curso de las negociaciones para definir cómo movilizan su propia agenda. En ese sentido el gobierno

tiene que ser muy claro en los acuerdos que va fijando con Chumbivilcas porque ellos tendrán repercusiones en el resto del Corredor.

También el sector privado debe estar observando lo que pasa en Chumbivilcas para definir sus próximas estrategias frente a la conflictividad social y a cómo el gobierno responda a ella. En ese sentido, otras empresas pueden pensar en volver a usar la suspensión de operaciones como mecanismo de presión. Sin embargo, esperaba una reacción más cautelosa de MMG a los avances logrados el 30 de diciembre en Chumbivilcas; con su anuncio de reemprender operaciones en la primera semana de enero, las suspensiones de operaciones podrían ir perdiendo eficacia como mecanismo de presión.

No obstante, es claro que MMG Las Bambas no va a dejar definitivamente su operación en Cotabambas; hay demasiado dinero invertido en ella. Para que valga la pena la suspensión de operaciones hecha por MMG Las Bambas, se debe seguir buscando una solución sostenible para su convivencia con las comunidades del territorio; el transporte de minerales en una vía sin asfaltar no es sostenible.

Durante el periodo de gobierno de Martin Vizcarra, habíamos llegado a un acuerdo con la empresa para que haga estudios serios y efectivos para concretar un mineroducto, tal como fue previsto en el proyecto minero original (aun cuando ese mineroducto tiene desafíos técnicos ineludibles para contar con el agua que necesitará para operar). Entretanto, el compromiso en ese periodo fue hacer un asfaltado económico de la vía, para que el flujo de los camiones de transporte de mineral no produzca polvo, el impacto ambiental más perjudicial para las comunidades a lo largo del trayecto. El ruido político, la vacancia del Presidente Vizcarra y la pandemia, entre otros, no permitieron concretar esa solución de corto plazo. Ahora el Estado, la empresa y las comunidades tienen buscar una solución duradera, sea mineroducto, ferrocarril u otra.

No hay que olvidar que, además de Chumbivilcas, el Corredor Minero abarca las provincias de Cotabambas en Apurímac y Espinar en Cusco, asimismo parte de Castilla en Arequipa, en las que también operan otras empresas mineras. Tampoco se trata solo de un corredor de transporte de mineral; es un territorio con una serie de potencialidades y carencias. Entonces cualquier solución vial necesitaría estar enmarcada en una estrategia de desarrollo territorial sostenible, donde converjan Estado, empresas y comunidades de ese territorio en su conjunto.

AaL: ¿Cuáles son las perspectivas del sector minero en el actual Gobierno?

El Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 sigue contando con los recursos de la minería para sostener el crecimiento del PBI y los ingresos públicos. No obstante, es conocido que en los últimos años varios proyectos mineros han tenido dificultades para avanzar. En nuevas inversiones de envergadura, lo más concreto en el horizonte cercano serían los proyectos de Quellaveco y Mina Justa, y según como los mercados lean la evolución del clima de estabilidad en el Perú, tal vez algunos otros proyectos como el de Newmont en Cajamarca (sulfuros) o Zafrañal.

Todo parece indicar entonces que en los próximos años vamos a tener un menor ritmo de entrada en operación de nuevos grandes proyectos mineros. No obstante, somos un país que ya tiene muchas unidades mineras en producción y esa debe ser una fortaleza sobre la cual apoyarnos en los próximos años. Estamos entrando en un ciclo de muy altos precios de los minerales en el mercado internacional. Al parecer la cantidad de canon que va a fluir el próximo año hacia los distritos, provincias y departamentos mineros va a ser enorme y con algo de suerte, ello podría prolongarse durante algunos años.

La pregunta del millón es ¿qué vamos a hacer con esos recursos para que generen desarrollo y bienestar duradero para la población? ¿Qué vamos a hacer para que ese dinero no se vaya en corrupción o en proyectos mal diseñados y/o ejecutados?

La experiencia de los últimos años muestra que la enorme cantidad de recursos que ya ha ido a los territorios productores no ha dado los resultados esperados. El debate público debe enfocarse entonces en definir cómo darle un uso más eficiente y efectivo a esos recursos y por qué no, cómo mejorar la distribución del canon para hacerla más equitativa.

Imaginemos además que esos recursos se articulen con los recursos del gobierno nacional y con aquellos que aportan las empresas mineras directamente en sus entornos, enmarcados en estrategias de desarrollo territorial a mediano y largo plazo, que garanticen una priorización adecuada de los proyectos en función de las potencialidades y brechas de cada territorio.

Seguramente necesitamos todavía de los recursos que aporta la minería. Pero necesitamos también aprovechar un posible nuevo ciclo de altos precios internacionales para diversificar nuestra economía y construir desarrollo territorial integrado en los ámbitos donde todavía necesitaremos que se desarrolle la minería. Ello configura un gran desafío de política pública y gobernanza territorial para el actual gobierno del Perú.

“...el gobierno perdió una oportunidad de proponer un dialogo multiactor, con buena fe y empatía, para poner al centro el desarrollo territorial ...”



Luis Miguel Inchaústegui

Ex Ministro de Energía y Minas. Abogado con más de 13 años de experiencia, gestionando áreas de RRCC, Desarrollo Sostenible, Comunicaciones y Relaciones Institucionales en empresas transnacionales de primer nivel, como por ejemplo, Gold Fields, Lumina Copper, Volcan y Barrick.

AaL: ¿Cuál es el balance de la conflictividad socioambiental del año bicentenario?

El balance es negativo debido a que en los últimos seis meses y en el inicio del gobierno del presidente Castillo, se ha debilitado fuertemente las áreas de prevención y manejo de los conflictos sociales que tiene la actividad minero energética en el Perú.

No sólo se ha debido a que normalmente en el inicio de un nuevo gobierno, siempre existe unos meses de adaptación de las nuevas autoridades, sino que este nuevo gobierno en los primeros dos meses —durante la gestión del Primer Ministro Bellido— la intención del gobierno nacional fue la de renovar a gran parte del equipo de las áreas de manejo de conflictos y pretender resolverlos con promesas de un diferente manejo de dichos conflictos que nunca se pudo dar; además la presión por lograr nuevos compromisos y mayores beneficios de algunos líderes sociales complicaron las operaciones mineras, logrando la paralización de tres operaciones y en especial, la paralización por varios días de la Mina Las Bambas.

AaL: ¿Cree usted que la conflictividad aumentó por las expectativas que generó el gobierno de Pedro Castillo? ¿Considera usted que el gobierno con el respaldo popular que tenía en el Sur pudo hacer algo más para que los conflictos no escalaran?

Sí, considero que han aumentado debido a que al inicio del gobierno del presidente Castillo, durante la gestión como primer ministro del Sr. Bellido se generó un aumento de las expectativas sociales, incluso mayor a las que

se habían ofrecido durante la campaña electoral.

Creo que el gobierno perdió una oportunidad de proponer un dialogo multiactor, con buena fe y empatía, para poner al centro el desarrollo territorial y conjuntamente con las empresas mineras que están operando lograr un plan de desarrollo territorial, y de esa forma empezar a cerrar las brechas y generar un ambiente positivo para las inversiones mineras.

No es algo fácil de realizar, pero definitivamente se tiene que lograr en un proceso de diálogo sincero, con respeto y promoviendo soluciones concretas en el mejor plazo posible. Para ello, se tiene que retomar los Comités de Gestión Minero Energéticos, promover espacios de diálogo preventivo y retomar la iniciativa del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas – Rimay.

AaL: ¿Qué opina de la suspensión de las operaciones de MMG las Bambas? ¿Qué efectos tendrá su retiro para el sector minero?

La suspensión de las operaciones de MMG Las Bambas es una mala señal para las inversio-



Fuente: Universidad Católica San Pablo.

nes mineras en el Perú, se debió resolver los problemas antes y agotar el diálogo antes de tomar esa decisión difícil para una empresa minera y para un gobierno nacional que desea promover una actividad minera sostenible.

Los efectos que genera esta medida, es una incertidumbre para las empresas mineras que están operando actualmente en el Perú y para las nuevas empresas que deseen invertir no sólo en el sector minero sino en todos los sectores, les está generando una gran duda sobre si invertir en el Perú. Las inversiones en la actividad minera son de largo plazo, pero esta situación, genera una llamada de atención y los inversionistas van a estar atentos a cómo se resuelve este conflicto, no sólo a cuál será la respuesta de la empresa minera sino la forma cómo el gobierno nacional promueva una solución sostenible a los conflictos. ¿Seguirá sin promover el diálogo y sólo trasladar los pedidos desmedidos de algunos líderes o promoverá una minería sostenible? Una minería que respete a las comunidades y cuide el medio ambiente y conjuntamente con las autoridades apoye el cierre de brechas usando los impuestos que se recauda y apoyando con proyectos de desarrollo territorial que sea necesarios. La idea no es que las empresas mineras reemplacen al Estado, sino que lo apoye al cierre de brechas, pero con un claro sentido de urgencia y logrando convertir lo que se recauda en desarrollo sostenible.

AaL: ¿Cuáles son las perspectivas del
Yanet Cueva - 04/12/2022

sector minero en este gobierno?

A pesar de estos últimos eventos, considero que la perspectiva del sector minero en este gobierno es muy buena, debido a la situación externa (crecimiento de los precios de los minerales, nuevo enfoque de una minería verde, una minería circular y sostenible) que está promoviendo el incremento de los precios de los minerales y la búsqueda de una minería sostenible. Considero que en el Perú se tiene una gran oportunidad de promover una minería con propósito, una minería sostenible y para lograr eso, el gobierno nacional con los cambios realizados en la PCM, está logrando reenfocarse en la promoción del diálogo sincero, respetuoso y multiactor, consiguiendo —con algunos inconvenientes— resolver los conflictos y promover una solución de largo plazo para los pedidos de las comunidades.

Este cambio debe impulsar un diálogo más permanente, un diálogo de buena fe y con mucha empatía que logre promover acuerdos que sean sostenibles, que resuelvan realmente las necesidades existentes, poniendo no los intereses particulares de algunos líderes y empresas, sino poniendo al centro el desarrollo territorial. Para ello, es importante que se retomem los Comités de Gestión Minero Energéticos del Minem, con procesos de diálogo promovidos por la PCM y el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas-Rimay.

“No va a ser fácil gestionar la conflictividad en los próximos meses, porque no solo la población de las áreas de influencia tiene demandas”.



Marina Irigoyen Alvizuri

Coordinadora del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. Magister en Sociología (PUCP), con especialización en gestión ambiental en los Países Bajos, Suecia e Indonesia, entre otros. Ha trabajado en Centro IDEAS, CARE Perú, Proyecto Perú Bosques y GIZ Cooperación Alemana.

AaL: ¿Cuál es el balance de la conflictividad socioambiental del año Bicentenario?

Este ha sido un año complejo, los conflictos socioambientales no solamente no han disminuido, sino que se han incrementado en intensidad alrededor de las industrias extractivas. Sabemos que los conflictos sociales son parte de los procesos de una sociedad, pero depende del compromiso por el diálogo de todos los actores y de generar mecanismos institucionalizados para poder gestionarlos. Eso es lo que no está funcionando en nuestro país.

El esfuerzo que durante el Gobierno de Transición llevó a cabo la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, buscando cambiar el abordaje de los conflictos y apuntando más a la prevención que a intervenir en el estallido del conflicto, sufrió un brusco pare en los primeros meses de gobierno del Presidente Castillo: con la validación de formas de relacionamiento escasamente dialogantes; con la pérdida de recursos humanos y de la institucionalidad; con compromisos poco rigurosos, a cargo de las más altas autoridades. Más recientemente desde el Estado -y particularmente la PCM- se está tratando de revertir ese enfoque pero falta mucho. El “embalse” de expectativas y compromisos de años atrás estalló sin tener actores públicos y actores políticos con capacidad para procesarlos. El panorama de COVID-19 se sumó a las frustraciones poblacionales.

No va a ser fácil gestionar la conflictividad en los próximos meses, porque no solo la población de las áreas de influencia tiene demandas. Bajo el tapete, las empresas presionan para que no se toque la reforma tributaria en lo referido a la minería, estando en proceso una consulta al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los posibles

pasos a tomar. Los sindicatos mineros también han pasado a tener voz en la situación demandando tanto continuidad de la inversión minera como mejoras. El Gobierno no ha mostrado una dirección unificada para enfrentar la situación.

AaL: ¿Cree usted que la conflictividad aumentó por las expectativas que generó el gobierno de Pedro Castillo? ¿Considera usted que el gobierno con el respaldo popular que tenía en el Sur pudo hacer algo más para que los conflictos no escalaran?

Fueron muchas expectativas generadas, particularmente en el sur peruano donde la candidatura del Presidente Castillo tuvo un apoyo poblacional hasta del 96%. Los múltiples ofrecimientos, los tiempos de maduración y respuesta a demandas contenidas, pero sobre todo la forma en que se han procesado los compromisos en las mesas de diálogo, la dificultad del Estado para atenderlos o que son compromisos imposibles de viabilizar (como una universidad u hospital en un ámbito que no correspondería) pintan un panorama muy complejo para el Gobierno. Esta situación debió ser claramente comunicada en aras de la transparencia del Estado (ya habían reportes de la Defensoría del Pueblo y de la PCM sobre lo complicado que

sería atender los compromisos), pero no se hizo. La situación tuvo su más reciente estallido con el bloqueo de las comunidades de Chumbivilcas, que termina en una nueva Acta de Compromisos. No todo está perdido, recién han pasado cinco meses de gestión, pero un cambio en la dirección del timón podría costar más bajas en popularidad que se puede frenar si se convoca a un amplio diálogo con diferentes fuerzas políticas y sociales.

AaL: ¿Qué opina de la suspensión de las operaciones de MMG las Bambas? ¿Qué efectos tendrá su retiro para el sector minero?

Alguien señaló: Lo que empieza mal, termina mal. Suena catastrófico, y darle vuelta al timón tiene elevados costos como se ha indicado. Sabemos que el proyecto inicial de Las Bambas suponía un mineroducto para trasladar el mineral hasta el puerto, lo cual fue dejado de lado por los cambios en la propiedad de la mina optando por llevar el mineral en cientos de camiones por una ruta afirmada que luego sería declarada vía nacional. La población ha protestado por años ante los impactos ambientales y ha exigido cambios y compensaciones, exigencias que se han incrementado más recientemente. A esta situación se aúna la lentitud en la inversión y satisfacción de demandas en el sur andino, por parte de los gobiernos regionales y municipales, siendo ámbitos de reconocidas necesidades; proceso que va de la mano de una creciente corrupción además de la falencia de capacidades técnicas de funcionarios y autoridades.

Tras el bloqueo de Chumbivilcas y el cierre temporal de las operaciones de MMG Las Bambas, el 30 de diciembre se ha llegado a un nuevo acuerdo, básicamente: oportunidades de trabajo para las comunidades (mantenimiento a las vías de parte de empresas comunales locales); saneamiento físico legal para tener luego compensaciones económicas; evaluación de la inclusión en la cadena de valor (para tener oportunidades de ventas, por ejemplo). Ello es base de un diálogo y puede ser una oportunidad para enfrentar las brechas sociales y económicas de este ámbito. También se delinea un calendario para tratar otros aspectos. Y la empresa se compromete a considerar a dichas comunidades como Área de Interés Social y Ambiental, lo que implica que bajo este tratamiento pueda invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero. MMG señala también que en pocos días reanudará actividades. La PCM plantea que considerará a estas comunidades como Zona de Atención Especial y hará seguimiento expreso a la readecuación del EIA de Las Bambas. Aparentemente se apunta a un Valor Compartido, el diálogo se ha restablecido y entidades como Red Muqui saludan este acuerdo.

Más llama la atención que como resultado de estas protestas el tratamiento a los impactos ambientales, punto de origen de las protestas, ya quedaron relegados. No se visualiza inversión en un mine-

roducto o ferrocarril. ¿Qué pasará si en determinado momento la empresa decide retomar los estudios y asume la construcción del ferrocarril? Otro punto. ¿Estarán las comunidades de Apurímac satisfechas que sean sus vecinos de Cusco los beneficiados con los servicios de transporte? Aquellos que no tengan empleo en las empresas comunales, ¿No generarán conflictos? ¿Y qué sucedería si los transportistas –empresa comunal– deciden incrementar los costos del transporte y la empresa considera que están sobrevaluados? Grandes temas por delante. Se estaría generando una dependencia entre comunidades y empresa, y poco se apunta a un desarrollo diversificado. Desarrollar y llevar en paz este acuerdo requerirá hilar fino por delante.

AaL: ¿Cuáles son las perspectivas del sector minero en este gobierno?

Tanto la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros como la Defensoría del Pueblo han realizado muy recientemente estudios que muestran que hay múltiples compromisos que no se cumplen, por diversos factores: falta de seguimiento y claridad de responsabilidad, los plazos, etc. Pero son responsabilidades que se deben calibrar y asumir. Urge que el Estado, con apoyo de la cooperación internacional si fuera necesario, desbroce el camino y apunte al cumplimiento, en lo posible. Potenciar capacidades de los gobiernos descentralizados se hace necesario, para que la inversión se concrete. Revisar el cumplimiento de los compromisos de las empresas frente a las comunidades es parte del rol de Estado. No siendo el único caso de conflictividad el de Las Bambas, una política general se hace necesaria.

Una idea que se perfila es la convocatoria del Acuerdo Nacional para institucionalizar el Diálogo y un Acuerdo sobre la Minería, retomando la Visión de la Minería al 2021, que el Rimay procesó con actores públicos y privados durante tres años, con una experiencia piloto descentralizada en Moquegua. Solo consensuando una Agenda en común podrá continuarse en ese sentido.

Los partidos deben tener una voz clara y firme ante a las industrias extractivas. Tienen la oportunidad de formar cuadros políticos y descentralizados desarrollando sus capacidades para el diálogo. Ser críticos no quiere decir ponerse de lado. Se requiere una sociedad civil fortalecida en las regiones, con capacidades técnicas, comunicacionales, dialógicas y con perspectiva de acción multiactor, con una mirada de desarrollo sostenible. De eso no se habla mayormente, nos toca repensar cómo apuntalar a la sociedad civil.

Solo conjugando estas diversas piezas, con apertura del diálogo multiactor, la minería puede ser una apuesta colectiva que coadyuve al desarrollo sostenible. Le queda al Gobierno del Presidente Castillo liderar el proceso para aprovechar la coyuntura de subida de precios y guardar pan para mayo.

“...no afectemos a la minería formal que está regulada por la intervención del Estado, y resolvamos los conflictos sociales en el marco de un diálogo social donde el principio de autoridad y bien común debiera prevalecer”.



Jorge Manco Zaconetti.

Profesor investigador de la cátedra de Minas y Petróleo, y sectores productivos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asesor y consultor especializado en energía y minas del congreso de la República. Ha realizado investigaciones relacionadas a la problemática del país, en materia de reformas estructurales, en particular en el sector minero y energético para organismos internacionales.

1. ¿Cuál es el balance de la conflictividad socioambiental del año Bicentenario?

Es verdad, que la minería que se desenvuelve en el país es heterogénea entre la gran, mediana y pequeña minería, con grandes diferencias salariales y de condiciones de vida y trabajo; pero lo grave es la expansión de la minería informal aurífera que con precios menores a los US \$ 800 dólares la onza, resulta rentable.

Por ello, muchas empresas formales “compran” la producción artesanal y la misma onza la venden a más de US \$ 1,800 dólares. Desde Cajamarca a Madre de Dios se extiende esta minería que causa mucho daño ambiental.

Es un peligro subyacente que deteriora la imagen de la minería, el aumento de la minería informal que reproduce formas precapitalistas, artesanales de explotación laboral, y salarial, altamente contaminante del medio ambiente por el uso indiscriminado del mercurio, y que evade los impuestos que debiera pagar, se ha convertido en uno de los problemas principales del sector.

El 2021 el segundo año de pandemia con más de 200 mil muertos por la crisis del “coronavirus”, con una mayor extensión de la pobreza y el subempleo, resultaría evidente el aumento de los conflictos socioambientales básicamente ligados

a la minería, curiosamente el único sector que tiene demanda internacional fuera de la cocaína.

Con una crisis política permanente, la sensación de un gobierno débil, sin brújula, con una oposición política creciente que apuestan por la vacancia presidencial. En ese contexto los conflictos en los sectores extractivistas aumentarán.

En resumen, no afectemos a la minería formal que está regulada por la intervención del Estado, y resolvamos los conflictos sociales en el marco de un diálogo social donde el principio de autoridad y bien común debiera prevalecer.

2. ¿Cree Ud. que la conflictividad aumentó por las expectativas que genera el gobierno de Pedro Castillo?

Con un gobierno que levantó la tesis de “no más pobres en un país rico” se construyó un ima-

ginario de un saqueo de las riquezas, y que se tenía derecho al reclamo social. Un gobierno de izquierda el primero en la historia del Perú, seis meses después ha producido un desencanto social donde importantes sectores que votaron por el profesor Castillo, hoy se enfrentan con un gobierno mediocre, incapaz de tomar decisiones importantes.

Ello explica en parte la clamorosa caída de la aprobación del Presidente por debajo del 40 % y el incremento de la desaprobación ciudadana. El error de fondo, a mi parecer, es que la mayoría de electores eligió la opción del profesor contra la derechista Fujimori, apostando por una serie de reformas democráticas en el marco de la Constitución vigente. No se votó por una opción socialista ni mucho menos. De allí, la oposición recalcitrante al gobierno que pronto ganará las calles.

Por ello resulta un error de percepción pensar que la mayoría de electores optaron por una línea socialista de cambios radicales en la economía. Menos aún cambiar la Constitución de 1993 que en groso modo ha permitido un crecimiento económico sostenido por lo menos del 4.1 % anual del PBI en términos reales, entre el 2001 y el 2019.

La pandemia demostraría la necesidad de hacer cambios en la Constitución seguramente que sí, pero en lo fundamental existen los recursos presupuestales para financiar un crecimiento económico para los próximos años.

Sin embargo, la conflictividad aumentará, en parte al desencanto social, en parte a la radicalidad de sectores minoritarios, y la proximidad de elecciones regionales en octubre próximo. En el fondo un Estado sin instituciones democráticas a pesar de 200 años de república, tiene un gobierno errático, débil, poco transparente en sus decisiones.

¿Considera Usted que el gobierno con el respaldo popular que tenía en el Sur pudo hacer algo más para que los conflictos no escalarán?

Mi percepción es que lo acontecido con las Bambas se ha reproducir en Cerro Verde, Antapaccay y otras importantes mineras pues el pensamiento radical de izquierda asume que hay que crear condiciones objetivas, agudizar las contradicciones económicas y sociales aprovechando las debilidades del "modelo económico"

En razón del poder de los medios de comunicación controlados por la derecha, la población del gran sur está cambiando de ánimo y en las próximas elecciones optará por nuevos liderazgos más radicales aún.

3. Qué opina de la suspensión de las operaciones de MMG Las Bambas ¿Qué efectos tendrá

su retiro para el sector minero?

Con el gobierno del presidente Pedro Castillo los conflictos sociales ligados a la minería tienden al agravamiento. Es más, con las elecciones regionales y municipales surgirán nuevos liderazgos que tendrán como "piñata" al sector minero, el sector más importante de la economía peruana.

Después de todo el excusa Arana hizo su capital político en la oposición a Conga (Cajamarca) que está más pobre que antes, Veronika Mendoza con su oposición a Antapaccay, ni que decir de Humala con su tesis que el oro "no se come".

Por ahora, la extensión y profundidad de los conflictos sociales en Ayacucho (Apumayo, Breapampa, Inmaculada y Pallancata), en Apurímac (Las Bambas), Ancash (Minera Antamina), Ica (Cerro Lindo) y otros que surgirán ante un gobierno que prometió "el paraíso a la vuelta de la esquina" demuestran la falta de estrategia del Estado para enfrentar y resolver los conflictos.

Los conflictos sociales tienen un alto costo económico, y de pérdidas de vidas que lamentar. Ante un "Estado ausente" en las provincias, la población organizada percibe que la generación de riqueza no se distribuye con justicia y equidad. Por ello demanda a la empresa privada, los bienes y servicios que el Estado no otorga a pesar de los recursos generados.

Un claro ejemplo lo constituye la paralización de la empresa china Minera Las Bambas que por los conflictos sociales no ha podido reponer los insumos ni trasladar la producción de concentrados de cobre al puerto de Matarani (Arequipa), a la fecha tiene más de 10 días de paralización en una empresa que factura por encima sobre los US \$ 3,500 millones de dólares.

La paralización de la producción ha significado dejar de emplear a más de 10 mil trabajadores directos e indirectos, con todos los efectos colaterales que ello significa. Empresas de servicios, transporte, alimentos y hotelería en la región verán mermados sus ingresos.

También se afecta la demanda de energía. Como cliente libre eléctrico se ha tenido que dejar de comprar energía equivalente a 165 megavatios de potencia con lo cual se resiente la producción eléctrica del país. A menor producción minera, menores ingresos fiscales y todo un efecto en cadena.

Si a ello se agrega que por la naturaleza de contrato Minera Las Bambas paga al Estado peruano el 3 % sobre el valor de la producción por concepto de "regalías contractuales" que básicamente se distribuyen en la región de Apurímac, tenemos la película completa sobre este problema económico social.



Fuente: La República.

Lo que está sucediendo con la paralización de Las Bambas, más la destrucción de los campamentos mineros de Apumayo en Ayacucho, y Anabí en el Cusco, éstas últimas propiedad del grupo de Guido del Castillo, exitoso empresario minero fallecido antes de la pandemia y que forjó su fortuna "desde abajo".

Todo ello constituye la antesala de lo que puede suceder en el 2022, de no enfrentar y resolver los conflictos sociales. Lo cual requiere una visión transversal del Estado, con los presupuestos no gastados por canon y regalías y otros, para hacer tangible el bienestar mediante la inversión regional que debe ser potenciada. No se trata de regalar la plata como ofreció la candidata Fujimori en la última campaña.

Con mayores conflictos sociales básicamente por problemas ambientales será muy difícil la promoción de nuevos proyectos mineros. En cartera existen más de US \$ 60 mil millones de dólares anunciados en diversos proyectos como Tía María, Los Chancas, Zafranal, La Granja, Galeno, etc. básicamente de extracción de cobre, el mineral que será cada vez más demandado a nivel internacional.

4. ¿Cuáles son las perspectivas del Sector Minero en este gobierno?

Si se trata de predecir el próximo año podemos crecer entre 3 % al 4 % del PBI un crecimiento inercial en razón de la maduración de algunos proyectos mineros como Quellaveco en Moquegua, Minas Justa, la Refinería de Talara entre otros. Es más, no estamos aprovechando la bonanza de los precios internacionales, especialmente del cobre.

La "crisis política" la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, las acusaciones de corrupción en el gobierno, el pedido de la vacancia presidencial por un mal uso de la incapacidad moral entre otras consideraciones impedirá un mayor crecimiento económico, es decir la creación de una mayor riqueza.

En el año que termina más de US \$ 17 mil millones de dólares provenientes de los ahorros de la clase media, y de las empresas privadas "han fugado" hacia los Estados Unidos y los llamados paraísos fiscales por la falta de confianza en el gobierno del profesor Pedro Castillo.

El gobierno debe otorgar confianza a los inversionistas privados y ha hecho bien en ratificar la confianza en Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCRP) pero ello no resulta suficiente. En especial lo que está sucediendo en el sector de energía y minas debiera preocupar al país.

Con un ministro de energía y minas que desconoce el sector, y tiene graves limitaciones propias, donde el activo personal es su cercanía con Perú Libre, con una visión anti empresa es poco lo que se puede esperar del sector, que crecerá en lo que los físicos denominan "dinámica inercial"

Pero el componente principal es la superación de la crisis política, y el Presidente de la República debe aprender a gobernar con transparencia y concertar políticamente con las fuerzas que apuestan por la democracia y las inversiones privadas para crear mayor riqueza que pueda ser distribuida socialmente.